

Actualidad núm. 64

Agosto 2011

Modificación del sistema de Seguridad Social

El pasado 2 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 27/2011, del día anterior, sobre *actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social*, cuya entrada en vigor se producirá, con carácter general, el 1 de enero de 2013, si bien muchas de sus disposiciones entraron en vigor el mismo día 2 de agosto, y otras lo harán en distintas fechas.

Puede consultarse el texto íntegro de la nueva disposición en: <http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf>

La Ley 27/2011 introduce modificaciones en muchas instituciones o figuras del sistema de Seguridad Social, como los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, la incapacidad permanente, la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el convenio especial con la seguridad social, supuestos de exención de la obligación de cotizar, etc., pero las modificaciones de calado se producen, sobre todo, en lo referente al régimen jurídico de la pensión de jubilación, materia a la que vamos a dedicar mayor atención.

Del contenido de la citada ley consideramos oportuno destacar lo siguiente:

Primero. Modificación del régimen jurídico de la pensión de jubilación.

a. Se prevén los 67 años como edad ordinaria de acceso a la jubilación, al tiempo que se mantiene la misma en 65 años para quienes hayan cotizado 38 años y seis meses. La implantación de los nuevos requisitos de edad se realiza de forma progresiva y gradual, en período de quince años, período de aplicación que también se aplica para completar los períodos de cotización que permiten el acceso a la pensión a partir de los 65 años, de modo que, partiendo de 35 años y 3 meses en 2013, el período de 38 años de cotización y seis meses será exigido en el ejercicio de 2027.

b. Se modifica el sistema de cálculo de la pensión de jubilación, que pasa a ser de 25 años, si bien con una aplicación paulatina hasta el año 2022.

c. Se modifica el período de tiempo preciso para alcanzar el cien por cien de la base reguladora de la pensión, estableciendo los siguientes porcentajes de aplicación a la base reguladora –porcentajes que serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2027, estableciéndose hasta entonces un período transitorio y gradual-: por los primeros quince años cotizados, el 50 por

100; y a partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 248, el 0,19 por 100 y los que rebasen el mes 248, el 0,18 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100, salvo en los casos en que se acceda a la pensión con una edad superior a la que resulte de aplicación, en los que se reconocerá al interesado un porcentaje adicional consistente entre un 2 y un 4 por 100 por cada año completo transcurrido entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, en función del número de años cotizados que se acrediten.

d. Se mantiene la posibilidad de jubilación anticipada de los trabajadores que tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 en los términos actualmente vigentes. Junto con esta posibilidad se establecen dos fórmulas adicionales de anticipación de la pensión de jubilación con coeficientes reductores de la cuantía: una, la que deriva del cese no voluntario del trabajador en su actividad y otra, la que deriva del cese voluntario. Para ambas modalidades será necesario acreditar un período mínimo de cotización de 33 años.

En el primer supuesto, será preciso haber cumplido 61 años de edad, estar inscrito en la oficina de empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud y que la extinción laboral se haya producido por causas económicas conforme a los artículos 51 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores o por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, como consecuencia de un procedimiento concursal o por violencia de género.

En relación con la segunda modalidad, la vinculada al cese voluntario, será necesario haber cumplido 63 años de edad y que la pensión resultante sea superior al importe de la pensión mínima que hubiera correspondido al interesado teniendo en cuenta su situación familiar.

e. Se incorporan dos modificaciones a la regulación de la jubilación parcial. En los supuestos en que resulta necesaria la celebración simultánea de un contrato de relevo por cuanto los trabajadores que pretenden jubilarse anticipadamente no han alcanzado la edad legal de jubilación (entre 65 y 67 años, según los supuestos), se exige en todo caso que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento de la base por la que venía cotizando el trabajador que accede a la jubilación parcial.

Además, en relación con la cotización durante el período de compatibilidad de la pensión de jubilación parcial con el trabajo a tiempo parcial, y sin perjuicio de la reducción de jornada, la empresa y el trabajador habrán de cotizar por la base de cotización que, en su caso, hubiere correspondido de seguir trabajando a jornada completa. Esta novedad en materia de cotización se aplicará de forma gradual elevando las bases de cotización en

un cinco por ciento por cada año transcurrido desde el inicio de la vigencia de la ley, hasta su completa aplicación a partir del 1 de enero de 2027.

La nueva ley modifica los apartados 6 y 7 del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores para acomodarlos a la nueva regulación del contrato de relevo y la jubilación parcial establecida en la misma.

Segundo. Expedientes de regulación de empleo que afecten a trabajadores de 50 años en empresas con beneficios.

La disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011 establece una novedosa obligación de las empresas que realicen despidos colectivos de efectuar una aportación económica al Tesoro Público, en los términos que se determinen reglamentariamente, siempre que concurren las siguientes circunstancias:

- Que sean realizados por empresas de más de 500 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores.
- Que afecten, al menos, a 100 trabajadores en un período de referencia de tres años, con independencia del número de trabajadores de 50 o más años de edad afectados.
- Que las empresas o el grupo de empresas del que forme parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a la autorización del expediente de regulación de empleo, considerándose que concurre tal circunstancia cuando el resultado del ejercicio sea positivo, tal como se define en el Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
- Que los trabajadores de 50 o más años de edad afectados no hubieran sido objeto de recolocación en la misma empresa, o en otra empresa del grupo del que forme parte, o en cualquier otra empresa, en los seis meses siguientes a la fecha en que se produzca la extinción de sus contratos de trabajo.

Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años de edad afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. El importe de la aportación se determinará según una escala en función del número de trabajadores de la empresa, del número de trabajadores de 50 o más años de edad afectados por el despido colectivo y de los beneficios de la empresa.

La nueva obligación será de aplicación a los expedientes de regulación de empleo iniciados a partir del 27 de abril de 2011.

Tercero. Cláusulas de los convenios colectivos que establecen edades de jubilación forzosa.

Se modifica la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores para establecer que, como mínimo, el trabajador que ve extinguido su contrato de trabajo por haber alcanzado la edad de jubilación según lo pactado en convenio colectivo, deberá tener cubierto el período mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que si bien la nueva redacción de la disposición adicional décima del Estatuto de los Trabajadores entró en vigor el 2 de agosto de 2011, se habilita en ella expresamente al Gobierno para demorar, por razones de política económica, *“la entrada en vigor de la modificación prevista en esta disposición adicional”* (sic).

Cuarto. Estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización.

La norma que analizamos establece que las ayudas dirigidas a titulados académicos con objeto de subvencionar estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización que impliquen la realización de tareas en régimen de prestación de servicios, deberán establecer en todo caso la cotización a la Seguridad Social como contratos formativos, supeditándose a la normativa laboral si obliga a la contratación laboral de sus beneficiarios, o a los convenios o acuerdos colectivos vigentes en la entidad de adscripción si establecen mejoras sobre el supuesto de aplicación general.

Además, se prevé que los programas de ayuda existentes a la entrada en vigor de la nueva disposición deberán adecuarse a lo dispuesto en la misma. En el caso de ayudas financiadas con fondos públicos, las Administraciones e Instituciones públicas implicadas realizarán las actuaciones oportunas para que en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la ley se produzca su efectiva aplicación.

Quinto. Beneficios por el cuidado de hijos.

Mediante una nueva disposición adicional al texto de la Ley General de la Seguridad Social, se establece que se computará como período de cotización, a todos los efectos, el período de interrupción de la actividad laboral motivado por el nacimiento de un hijo o por adopción o acogimiento de un menor de 6 años, cuando dicha interrupción se produzca en el período comprendido entre el inicio del noveno mes anterior al nacimiento o al tercer mes anterior a la adopción o al acogimiento y la finalización del sexto año posterior a dicha situación.

La duración de este cómputo como período cotizado a dichos efectos será de 112 días por cada hijo o menor adoptado o acogido. Dicho período se incrementará anualmente a partir del año 2013 y hasta el año 2018, hasta un máximo de 270 días por hijo, sin que en ningún caso pueda ser superior a la interrupción real de la actividad laboral.

Por otra parte, se van a considerar como cotizados a efectos de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad los tres años que los trabajadores disfruten por cuidado de hijo en los supuestos de nacimiento, adopción o acogimiento permanente o preadoptivo.

Sexto. Modificación del régimen jurídico de la incapacidad permanente.

El artículo 3 de la nueva ley adecua la fórmula de cálculo para determinar la base reguladora de la incapacidad permanente a las reglas de cálculo que se establecen para la pensión de jubilación. Además, en lo que se refiere a la integración de lagunas por los períodos en los que el trabajador no tuvo obligación de cotizar, establece, de conformidad con la nueva regulación de la pensión de jubilación, unas nuevas reglas que tienen en cuenta los esfuerzos de cotización realizados.

Se clarifica la compatibilidad en el percibo de la pensión a la que se tenga derecho por la declaración de incapacidad total en la profesión habitual con la realización de funciones y actividades distintas a las que habitualmente se venían realizando, tanto en la misma empresa como en otra distinta, como es el caso de los colectivos que tienen establecida y regulada funciones denominadas de segunda actividad.

Por otra parte, se establece la incompatibilidad de la pensión de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez con el trabajo después de la edad ordinaria de jubilación.

Séptimo. Cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Se generaliza la protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que pasa a formar parte de la acción protectora de todos los regímenes que integran el sistema de Seguridad Social, si bien con respecto a los trabajadores que causen alta en cualquiera de tales regímenes a partir de 1 de enero de 2013.

No obstante, en el caso de socios de cooperativas comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, esta protección obligatoria podrá desarrollarse en régimen de colaboración con la Seguridad Social, siempre que estas cooperativas dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al Sistema

Público, que cubra estas contingencias y que dicho sistema intercooperativo cuente, con anterioridad al 1 de enero de 2033, con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal. Esta última previsión requiere de desarrollo reglamentario.

Octavo. Cotización en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Con la finalidad de hacer converger la intensidad de la acción protectora de los trabajadores por cuenta propia con la de los trabajadores por cuenta ajena, las bases medias de cotización en el citado Régimen Especial experimentarán un crecimiento al menos similar al de las medias del Régimen General. En todo caso, la subida anual no superará el crecimiento de las medias del Régimen General en más de un punto porcentual.

Además, conforme a lo previsto en los artículos 25.3 y 27.2c del Estatuto del Trabajo Autónomo, se podrán establecer excepciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores autónomos que, por su naturaleza, tienen especiales dificultades para aumentar su capacidad económica y de generación de rentas, o para aquellos sectores profesionales que de forma temporal puedan sufrir recortes importantes en sus ingresos habituales.

Noveno. Socios trabajadores de sociedades laborales.

Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuando el número de socios no sea superior a veinticinco, aun cuando formen parte del órgano de administración social, tengan o no competencias directivas, disfrutarán de todos los beneficios de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta ajena que corresponda en función de su actividad, así como la protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.

Décimo. Protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

Se modifica el ámbito subjetivo de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, para disponer que la dicha protección no resultará obligatoria en el caso de socios de Cooperativas comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que estas Cooperativas dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al Sistema Público, que establezca un nivel de cobertura, en lo que respecta a las situaciones de cese de actividad, al menos equivalente a la protección legal por cese de actividad.

Undécimo. Trabajo autónomo a tiempo parcial.

Se modifica la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo para posibilitar expresamente el trabajo a tiempo parcial de estos trabajadores.

Duodécimo. Empleados de Hogar.

Se regula también en esta ley la integración, con efectos de 1 de enero de 2010, del Régimen Especial de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, pasando a constituir dentro de él un Sistema Especial para dichos trabajadores. Se aplicarán a cada empleado de hogar las normas de dicho Sistema Especial desde el día primero del mes siguiente a aquél en que por el empleador o por el empleado se comunique a la Tesorería General de la Seguridad Social –dentro de los seis primeros meses del año 2012- el cumplimiento de las condiciones exigidas para su inclusión en el Sistema Especial. Es previsible que próximamente se dicten las necesarias normas de desarrollo de esta modificación legal

Madrid, 31 de agosto de 2011.